

zas Armadas en los programas socioeconómicos... El Gobierno continuará impulsando esta participación, que permite a Chile contar con un potencial humano de ALTA PREPARACIÓN MORAL E INTELECTUAL.»

Resulta chocante pensar que, en los mismos momentos en que Allende pronunciaba estas palabras, en Valparaíso los altos mandos del Cuerpo de Infantería de Marina adiestraban y proveían de material explosivo a dos grupos civiles (Patria y Libertad y Comandos de Ex Cadetes) para sus tareas de terrorismo «de apoyo» a un «paro general de actividades empresariales» que se proyectaba desencadenar en los «próximos sesenta días». En el mismo instante que Allende decía esto, en la Academia de Guerra del Ejército, en Santiago, lo generales Sergio Arellano Stark, Javier Palacios Ruhman, César Raúl Benavides, Ernesto Baeza Michelsen y Herman Brady Roche, discutían «un plan general tentativo» para invadir Santiago, reducir los cordones industriales, paralizar la capacidad de movimiento de las organizaciones sindicales de la Unidad Popular, y atacar y rendir el Palacio de Gobierno. En ese mismo momento, en el Estado Mayor de la Armada, el jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso, vicealmirante José Toribio Merino, planteaba su famoso plan «de los tres tercios», que significaba «fusilar unos tres mil activistas responsables, encarcelar otros tres mil, y exiliar a tres mil dirigentes políticos de todas las tendencias» para «pacificar el país» y restablecer el orden. Para crear un Gobierno «de las Fuerzas Armadas».

Los duros

Pero aun cuando los «cabeza de huevo» de la Academia de Guerra y del Servicio de Inteligencia Militar del Ejército se convirtieron en los «líderes intelectuales», no constituían la fuerza mayoritaria dentro de los altos mandos. Su poder residía, más que en el número, en su estrecho contacto con el Pentágono y su centro intelectual en Washington, la American University. Y ese contacto estrecho les había permitido, desde fines de 1970, construir una especie de *memorándum* con respecto a las líneas principales del Programa de Gobierno de la Unidad Popular, que sirvió para aglutinar a los diversos sectores políticos dentro de los mandos militares en torno a una «línea de conducta» cuyo esquema ya trazamos en las páginas anteriores.

Los puntos principales de ese *memorandum* eran los siguientes:

1) Las Fuerzas Armadas consideran «justo» que las riquezas básicas del país estén en manos del Estado chileno, porque eso fortifica la economía nacional y, de paso, fortifica la capacidad de equipamiento de las Fuerzas Armadas.

(Este pensamiento llegó a un clímax agudizado en julio de 1972, cuando el general Carlos Prats, por encargo de su cuerpo de generales, planteó a Salvador Allende que «la administración de las compañías nacionalizadas del cobre debería estar principalmente en manos de técnicos militares, por considerarse una industria estratégica», y que «de las entradas provenientes de la venta del cobre se debería estudiar un financiamiento autónomo para las Fuerzas Armadas». Ello, en los hechos, significaba que los militares chilenos quedarían como entidad al margen del Parlamento para su financiamiento, lo que los habría convertido en un Poder dentro de otro Poder. Allende, en aquella época, encontró «razonable la idea», pero no tuvo tiempo, al parecer, para volver sobre el tema.)

2) Las Fuerzas Armadas están de acuerdo con la nacionalización de las minas de cobre, pero, al mismo tiempo, también están de acuerdo en que «a las empresas norteamericanas que las explotaron se les pague una indemnización razonable». (El 4 de noviembre de 1971, Salvador Allende puso énfasis en este aspecto, en su discurso de primer aniversario, cuando la «presión militar» pro «indemnización para la Anaconda y la Kennecott» era muy fuerte, después de ser nacionalizadas las miras en julio de ese mismo año. Dijo Allende: «Cuatro cifras para recordar al pueblo. Las compañías invirtieron a lo sumo 30 millones de dólares. En 50 años se han llevado 4.500 millones de dólares. A dos compañías hasta ahora, y si no resuelve en contra el Tribunal Especial, se les va a pagar indemnización, y si no resuelve otra cosa el Tribunal, no les pagaremos indemnización a la Anaconda, a la Kennecott ni al Salvador, pero las deudas que tienen las compañías son de 736 millones de dólares y lógicamente es previsible que tendremos que hacernos cargo de ellas. Por lo tanto, ESTAMOS PAGANDO UNA INDEMNIZACION INDIRECTA de 736 millones de dólares a las compañías del cobre que se llevaron en 50 años 4.500 millones de dólares». Este argumento, real y contundente, bajó la presión militar sobre el tema. Pero de todos modos hizo subir la deuda externa de Chile, de un golpe, de más de 3.000 millones de

dólares a más de 4.000, lo cual puso a la economía chilena todavía más en manos de los consorcios financieros norteamericanos.)

3) Las Fuerzas Armadas consideran necesario que se haga una reforma agraria que permita el desarrollo capitalista del campo, liquidando parte del poder de los latifundistas sobre la sociedad chilena. Esta reforma agraria debe servir de apoyo a la industrialización del país, como nuevo mercado y como productora de materias primas industriales.

(Esta tesis, sacada de la Alianza para el Progreso, del asesinado presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, que ya había provocado la ira de los latifundistas con la política agraria del Gobierno de Eduardo Frei, provocó una campaña iracunda de sus organizaciones contra los generales chilenos, a quienes acusaban de «gallinas», por permitir que Allen- de gobernara).

4) Las Fuerzas Armadas estiman que es «justo» que las instituciones de crédito (bancos) nacionales estén controlados o en manos del Estado chileno, para «ordenar» mejor el «crecimiento económico democrático» del país, el cual históricamente ha sido entrabado por los intereses particulares de algunos sectores poderosos de la empresa privada monopólica. Los cuales, con su actitud «recalcitrante», han puesto o están poniendo en peligro «la estabilidad de todo el sistema económico y social» en que se basa la sociedad chilena.

5) Las Fuerzas Armadas estiman necesario que los consorcios norteamericanos de la banca, la industria y el comercio («los más adelantados del mundo y los más eficientes»), participen, bajo un «reglamento claro y preciso que resguarde nuestra soberanía nacional», en el desarrollo industrial chileno y en la capacidad de capitalización de la economía nacional, porque «sin ese capital y tecnología de los Estados Unidos, NO PODREMOS SALIR DEL SUBDESARROLLO».

(En mayo de 1971, en la reunión en Lima de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, el ministro de Hacienda de Chile y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista chileno, Américo Zorrilla, planteaba la misma tesis, diciendo: «En el marco del proceso revolucionario chileno, desempeñan su *rol* tanto el financiamiento externo como las inversiones de capitales extranjeros... orientados hacia los fines prioritarios que señalen las necesidades de nuestra economía... Para estas inversiones extranjeras está abierto el an-

cho campo de las áreas mixta y de propiedad privada, previo el acuerdo con el Estado que asegure tanto los legítimos intereses de aquéllas, como su debida orientación en beneficio del desarrollo del país». Tanto la tesis militar chilena como las palabras del ministro de Hacienda, tenían coherencia con el planteamiento del *Informe sobre América Latina*, de Nelson Rockefeller, en el que se decía: «Creemos que Estados Unidos debe encaminarse cada vez más hacia una relación de AUTÉNTICA ASOCIACIÓN» en sociedades mixtas con los latinoamericanos, en las cuales «la inversión privada extranjera pueda proveer conocimientos técnicos esenciales y capital».)

6) Las Fuerzas Armadas creen que todos estos cambios deben hacerse dentro de «nuestro sistema institucional, con respecto a la democracia formal y en solidaridad con el bloque occidental de naciones».

Sobre estos seis puntos planteados por los «cabeza de huevo» (que de aquí en adelante llamaremos generales «reformistas», para diferenciarlos de los otros grupos de generales que definiremos enseguida), los altos mandos militares consiguieron un criterio uniforme para afrontar el «fenómeno» que representaba la Unidad Popular. Sobre estos mismos puntos, el presidente Allende y parte de las directivas de la Unidad Popular consiguieron una especie de «entendimiento cordial» con las Fuerzas Armadas, y éstas, a su vez, influyeron en las directivas de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. Incluso las agrupaciones empresariales monopólicas privadas, como la Sociedad de Fomento Fabril y la Sociedad Nacional de Agricultura, aceptaron el criterio de «esperar y ver» de los generales «reformistas» y del Pentágono, bajo la línea general de que «Allende nos puede servir para apagar el incendio».

Un incidente ocurrido en agosto de 1971 señala cómo, durante los primeros nueve meses de ese año, el Gobierno de la Unidad Popular, reducido su programa a lo que las Fuerzas Armadas y el Pentágono querían, tenía el apoyo condicionado incluso de sus enemigos políticos. En aquella fecha, el Eximbank, organismo financiero del Gobierno de los Estados Unidos, cediendo a las presiones de la Anaconda y la Kennecott, negó a Chile un préstamo de 21 millones de dólares para compra de aviones Boeing de pasajeros para la Línea Aérea Nacional (LAN), con el fin de «presionar por indemnización para las empresas del cobre».

El diario «El Mercurio» del día 17 de agosto de ese año, al

comentar esta medida del Eximbank, escribía: «Esta política norteamericana hace peligrar las relaciones interamericanas y constituye la repetición de antiguos errores históricos que se suponían comprendidos».

El propio Partido Nacional, expresión política de la oligarquía agrícola, industrial y comercial, el 16 de agosto emitía una declaración de airada protesta: «Actitudes y declaraciones como las que señalamos sólo contribuyen a entorpecer las relaciones internacionales y a dificultar la solución de los problemas» y «demuestran una lamentable falta de tino y de conocimiento de la realidad chilena».

Sin embargo, fue el diario oficial de la Democracia Cristiana «La Prensa», en su página editorial del 16 de agosto de 1971, la publicación que más claramente planteó el problema:

«La decisión de la que aparece como responsable el presidente del Eximbank tiene toda la torpeza de una provocación... Así el Gobierno norteamericano aparece una vez más, y prematuramente, identificado con intereses privados, olvidando un interés político superior... No es un misterio para nadie —y las misiones de vario orden que tiene Estados Unidos en Chile deben haberlo informado así a su Gobierno— que en el (Gobierno) de nuestro país, por el momento al menos, coexisten dos tendencias. Hay la de un sector que desea conducir la revolución chilena dentro del respeto a la Constitución, sin violencia en el plano interno y sin crisis internacional. Hay otro sector que desea provocar una ruptura violenta que, necesariamente, ha de proyectarse también en el plano internacional. Son éstos los que piden o anuncian, de partida, que las empresas expropiadas no deben ser indemnizadas... El Eximbank ha comenzado a hacerle el juego a esta tendencia, que no quiere nada más que provocar, precisamente, tales reacciones... En pocas ocasiones, si las hay, SE HA OPERADO EN AMÉRICA LATINA UNA NACIONALIZACIÓN CON MÁS FORMALIDAD LEGAL —y hasta constitucional— Y MÁS GARANTÍAS PARA LAS EMPRESAS NORTEAMERICANAS AFECTADAS».

En verdad, los representantes políticos de la oligarquía agrícola (ya en decadencia a partir de Frei en 1967 con la reforma agraria), comercial, financiera e industrial chilena, sabían perfectamente de qué estaban hablando cuando, en agosto de 1971, reprochaban al gobierno de Nixon haberse dejado llevar por las presiones de los consorcios Anaconda y Kennecott. La propia organización de la oligarquía industrial chilena, Sociedad de

Fomento Fabril, el mismo 16 de agosto, escribió una airada carta al presidente del Eximbank, en la cual le explicaba que «Chile vive un proceso de profundas transformaciones económico-sociales que afectan radicalmente su estructura económica y, en consecuencia, la situación de sus empresarios. Frente a él, nuestra institución gremial— la más antigua de las Américas— se encuentra empeñada en MINIMIZAR EL COSTO ECONÓMICO DE LAS TRANSFORMACIONES QUE SE VIVEN y en garantizar plenamente que él se desenvuelva en un marco de libertad y democracia y con pleno respeto a las garantías fundamentales». Por eso, frente a la negativa de préstamos por parte del Eximbank, «como empresarios privados y sobre todo por respeto a nuestra noble tradición democrática, no podemos aceptar que se subordinen resoluciones de esta índole, condicionándolas a decisiones que pueda adoptar nuestro Gobierno dentro del régimen jurídico que democráticamente se ha dado al país». Seguidamente, la Sociedad de Fomento Fabril le pide al Eximbank que revoque la postergación del préstamo a LAN-Chile.

Fuerza y debilidad

Cuando el Pentágono decidió en octubre de 1970 dar luz verde a la «experiencia de Allende» para «esperar y ver» si se le podía manejar como «bombero del incendio popular», los generales «reformistas» estuvieron de acuerdo y, en consultas con los sectores industriales y comerciales chilenos, estimaron que, si no se asfixiaba desde el exterior el experimento, «este puede resultar» y «la reforma de las estructuras hacia un capitalismo de Estado más sólido» puede «calmar la insurrección popular».

El Gobierno de Allende había iniciado una política de «reactivación económica» para 1971, que se basaba fundamentalmente en la utilización de toda la capacidad productiva y en el aumento de la demanda interna por medio de sustanciales reajustes de sueldos y salarios bajos, con un control de precios que, en una estructura monopólica como la chilena, afectaba en realidad menos a la oligarquía que a las empresas medianas y pequeñas. Esta reactivación económica hizo que en 1971, los índices de crecimiento económico del país llegaran a 8,3 %, lo cual constituía un récord. Pero, ese era el tope de la reactivación. Si en ese momento no había acumulación de capital, el sistema se